

San Salvador, 20 de abril de 2020

Señor  
**Luis Alberto Moreno**  
Presidente  
Banco Interamericano de Desarrollo

Estimado Sr. Moreno:

Por este medio me permito manifestare que actualmente El Salvador está viviendo una crisis sin precedentes derivada de la pandemia conocida como COVID-19, al igual que la mayoría de los países del mundo; a pesar de las medidas de contención aplicadas por el Gobierno, muchas de ellas sin precedente a nivel internacional, el número de casos confirmados ha ido creciendo, aunque afortunadamente a un ritmo menor que el experimentado en otros países afectados. Al cierre del 17 de abril se contabilizaron 190 casos totales, de los cuales 140 siguen activos, 43 recuperados y 7 fallecidos, y se espera que el número continúe creciendo.

El Gobierno de El Salvador anunció nuevas medidas destinadas a frenar la transmisión local, principalmente a través del seguimiento directo de nexos epidemiológicos de los casos locales identificados, y un control estricto de las medidas de restricción a la movilidad de las personas, esperando que las mismas ayudarán a disminuir aún más el ritmo de contagio, sin embargo, debemos estar preparados para atender una cantidad alta de pacientes y extremar medidas de contención en caso de que las ya dispuestas resulten insuficiente.

El país también ha implementado medidas de alivio económico, entre las que se destacan transferencias monetarias de \$300.0 a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia y una bonificación de \$150.0 a los trabajadores del estado con funciones esenciales que deben mantenerse en sus puestos de trabajo. Asimismo, se implementaron moratorias a ciertos pagos y beneficios de naturaleza tributaria. Las principales medidas se resumen a continuación:

- a) **Declaración del Estado de Emergencia (Decreto Legislativo No.593).** La Asamblea Legislativa decretó por unanimidad el 14 de marzo el Estado de Emergencia Nacional por un período de 30 días, lo que permite: (i) limitar la circulación de las personas; (ii) prohibir toda clase de espectáculos; (iii) determinar precios máximos para los artículos y servicios relacionados a la pandemia por parte de la Defensoría del Consumidor; (iv) revisión urgente de asignaciones presupuestarias por la Asamblea Legislativa; (v) suspensión de clases y labores académicas; y (vi) suspensión de las labores no vitales para la emergencia de los trabajadores del sector público, entre otros



- b) **Restricción temporal de ciertos derechos constitucionales (Decreto Legislativo No. 594).** En sesión extraordinaria el 29 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley que restringe las garantías constitucionales, con el objetivo de atender la crisis. Dicha tuvo una vigencia de 15 días (hasta el 13 de abril de 2020). La normativa no limitó la libertad de expresión ni de difusión de pensamiento, permite la privacidad en las telecomunicaciones.
- c) **Plan de Respuesta y Alivio Económico.** Ante el inminente impacto económico por la pandemia, el Gobierno se encuentra ejecutando 30 medidas contempladas en su plan económico anticrisis por el COVID-19. Estas medidas buscan atender a aquellas personas naturales y jurídicas directamente afectadas por la pandemia. Las principales medidas son: (i) exoneración de derechos arancelarios a la importación de ciertas categorías de bienes; (ii) suspensión temporal de pago de servicios como agua potable, electricidad, y telecomunicaciones; (iii) transferencia de US\$300 a familias de bajos recursos que perdieron su fuente de ingreso; (iv) bonificación de US\$150 a trabajadores del estado con funciones indispensables, y (v) prórroga del pago del impuesto sobre la renta del ejercicio 2019 a varios tipos de sujetos pasivos.

Además del costo en vidas y la pérdida de bienestar por las medidas de contención, la pandemia conllevará un alto costo económico y fiscal al país que es necesario atender. Desde hace diez años, El Salvador viene implementando medidas de ajuste fiscal de manera disciplinada que nos llevó a tener tres años consecutivos de superávit fiscal primario, además de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el año 2016 y mejoras sustanciales a las administraciones tributaria y financiera. Todo este esfuerzo se ve comprometido por los efectos previstos económicos de la pandemia, los cuales incluyen una estimación de contracción de la economía de más de 6% en el 2020, una disminución de ingresos tributarios considerables, y la necesidad de financiar con endeudamiento nuevo un paquete de medidas urgentes de mitigación, atención y recuperación con un costo aproximado a la fecha de \$2,000.00 millones, o 7.25% del PIB.

Este nuevo endeudamiento será canalizado a través del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (Fondo), aprobado el 26 de marzo de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 608, y por medio de este mecanismo se financiarán las actividades de respuesta inmediata descritas arriba, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria (incluyendo la construcción de un hospital nuevo dedicado a pacientes de COVID-19), y medidas para reactivar la economía incluyendo proyectos municipales, proyectos para micro y pequeña empresa, reconversión de la estructura agropecuaria, reconstrucción del tejido productivo, y renovación de los sistemas de agua potable, entre otros. Además del financiamiento proveniente del préstamo SDL que apoya la presente Carta de Políticas, el Gobierno ha solicitado un préstamo adicional del BID para apoyo presupuestario y el apoyo de otros organismos multilaterales, en particular un Instrumento de Financiamiento Rápido del Fondo Monetario Internacional mediante el cual se recibirán aproximadamente US\$389.0 millones de apoyo inmediato a la balanza de pagos.

Dicho acuerdo fue aprobado por el Directorio del FMI el día 14 de abril del presente año y conlleva los siguientes compromisos del gobierno en el marco de su Carta de Intenciones:





- a. **Reducir el déficit fiscal para lograr la sostenibilidad de la deuda pública:** (i) Llevar a cabo un ajuste fiscal gradual de al menos 3% del PIB en el período 2021-24, logrando un superávit fiscal primario de 3.5% en el 2024 que ponga la relación deuda/PIB en una trayectoria descendente hacia la meta de 60% en el 2030 en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal; y (ii) abstenerse de adoptar medidas o políticas que deterioren la sostenibilidad de la deuda pública.
- b. **Reorientar la política fiscal para promover el crecimiento:** Analizar el programa de inversión pública y posponer aquellos proyectos financiados con recursos presupuestarios que no atiendan la emergencia o recuperación post-pandemia.
- c. **Mantener una economía abierta, competitiva y transparente:** (i) Fortalecer la competitividad mejorando el ambiente de negocios, reducir la deuda pública, combatir la corrupción, fortalecer el marco regulatorio de supervisión financiera, y la gobernanza de los marcos de AML/CFT<sup>1</sup>, y (ii) cumplir con las previsiones establecidas en la Carta Constitutiva del FMI en cuanto a no imponer restricciones a pagos internacionales o incurrir en prácticas de monedas múltiples, o imponer restricciones comerciales con fines de manejo de la balanza de pagos.

Tomando en consideración lo indicado anteriormente, deseo reiterar el compromiso del Gobierno de El Salvador de cautelar la salud del pueblo salvadoreño durante esta pandemia, a la vez, de implementar las medidas necesarias para recuperar la senda de crecimiento, una vez que la emergencia termine, y así mismo mantener el compromiso del Gobierno de incorporar disposiciones para la protección del gasto social en las Leyes de Presupuesto del 2021 al 2024, tal como se ha venido realizando desde años anteriores.

Atentamente,



Nelson Eduardo Fuentes Menjivar  
MINISTRO DE HACIENDA

<sup>1</sup> Combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.